

La sociedad civil rusa, veinte años después

Russian civil society, 20 years later

Samuel A. Greene

Profesor visitante de Ciencia Política y director del Center for the Study of New Media & Society,
New Economic School, Moscú
sgreene@nes.ru

RESUMEN

En el momento en que Vladímir Putin iniciaba su primer mandato como presidente de Rusia, a principios de 2000, muchos analistas se lamentaban de la desaparición de la sociedad civil rusa. A finales de 2011, cuando Putin se prepara para un tercer mandato presidencial, los mismos analistas se han visto sorprendidos por el resurgimiento de protestas ciudadanas. Con una narrativa expresada en términos de éxito y fracaso, dependiente de un vocabulario normativo y conceptos analíticos estáticos, no se puede dar sentido a esa evolución. Una narrativa más coherente, como la que se trata de presentar en este artículo, debe echar mano de conceptualizaciones sobre las interacciones, en las que los ciudadanos y el Estado son vistos como mutuamente constituyentes a través de una serie de imbricaciones sociales y políticas complejas. Una narrativa así, además, no debe partir del año 2000, sino retrotraerse más allá en la historia, dilucidando la evolución en los últimos veinte años tanto del Estado soviético y postsoviético como de la propia sociedad. De esta manera, el declinar de la sociedad civil en los años noventa puede entenderse, entonces, como paralelo a la desintegración de las instituciones donde interactuaban el Estado y la sociedad, y el resurgir del activismo cívico en años recientes como correspondiente a la consolidación del autoritarismo.

Palabras clave: Sociedad civil, Rusia, Estado, gobernanza

ABSTRACT

By the time Vladimir Putin began his first term as president of Russian, in early 2000, most analysts were lamenting the demise of Russian civil society. In late 2011, as he prepared to return to the Kremlin for a third term, the same analysts were surprised by the resurgence of grassroots protest. A narrative expressed in terms of success and failure, relying on a normative vocabulary and static analytical concepts, cannot, I argue, make sense of that progression. A more coherent narrative –which this article attempts to present– would look to concepts of interaction, in which citizens and the state are seen as constituting one another through a complex series of social and political engagements. Such a narrative, moreover, must not begin in 2000, but must look further back into history, elucidating the co-evolution of Soviet and then post-Soviet state and society over the past twenty years. In this view, then, the decline of civil society in the 1990s can be seen as accompanying the disintegration of the institutions of state-society interaction, while the reemergence of civic activism in more recent years comes hand in hand with the consolidation of authoritarian governance.

Keywords: Civil society, Russia, State, governance

En 1991, la sociedad civil en Rusia murió con la Unión Soviética. Veinte años más tarde, mientras la élite gobernante rusa consolida otra vez un nuevo Estado autoritario, renace junto a ella una nueva sociedad civil. Sostengo que esto no es una coincidencia, sino un fenómeno natural: la sociedad civil, cuyo cometido es hacer de mediadora entre los ciudadanos y el Estado, no puede evolucionar sin un Estado consolidado y, cuando lo hace, refleja inevitablemente los contornos de este Estado. La cuestión que se plantea para la década que ahora empieza es la de si esta nueva sociedad civil es suficiente para cuestionar la gobernanza autoritaria, en línea con la teoría democrática normativa, o si efectivamente respaldará la nueva cristalización del gobierno antiliberal.

Cuando Vladímir Putin empezó su primer mandato como presidente de Rusia en el año 2000, la mayoría de analistas deploraban la desaparición de la sociedad civil rusa. De una manera destacada, Marc Morje Howard (2003) lamentaba la “debilidad de la sociedad civil en la Europa poscomunista” –y en Rusia en particular– subrayando que la escasa disposición de los rusos (y de otros) a participar en grupos cívicos y en organizaciones de voluntarios reflejaba un legado de desconfianza heredado del pasado comunista. Le acompañaban en esta conclusión Stephen Fish (1995 y 2005), Richard Rose (1999) y otros, aunque con ciertos matices por lo que respecta a la causa del “fracaso”, sobre la que hay un acuerdo bastante general. Ciertamente, más o menos a mitad del primer mandato de Putin era difícil encontrar algún analista que afirmase que la sociedad civil rusa estaba vivita y coleando (la excepción más notable era la de Javeline y Lindemann-Komarova, 2010). Proliferaron, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales estaban financiadas por el Estado ruso y otras por gobiernos y donantes occidentales. La mayor parte de estas últimas luchaban por el establecimiento de una agenda democrática, normativa, en defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y las minorías, del medio ambiente u otras causas, con diversos grados de éxito y diversos niveles de compromiso con las circunscripciones locales dentro de la propia Rusia (véase Ottaway y Carothers; Evans et. al, 2006).

Y, sin embargo, a principios del segundo mandato de Putin parecía que estaba emergiendo una nueva sociedad civil. Movimientos de base, de nueva creación, atomizados y débiles –a menudo sin estructura, ni financiación ni un liderazgo claro– surgieron en todo el país y en diversos ámbitos de actividad. De este modo, automovilistas molestos por las regulaciones que prohibían los coches con el volante a la derecha y otras limitaciones; propietarios de vivienda enojados por las amenazas en su vecindario; inversores estafados y ciudadanos comunes maltratados por la policía, etc., empezaron a establecer tentativamente líneas que no debían ser cruzadas y que, sorprendentemente, el Estado y sus representantes a menudo no se atrevieron a cruzar (Greene, 2006 y 2007). El descontento llegó también, finalmente, al ámbito laboral, con una oleada de huelgas en 2005-2007 que afectaron a las industrias de la automoción, el transporte de mercancías, los bienes de consumo, la metalurgia, la minería y otros sectores de toda Rusia (Greene

y Robertson, 2010). Todos estos movimientos tenían en común un mismo sentido de la justicia, la convicción de que el Estado estaba transgrediendo los derechos más fundamentales de los ciudadanos a vivir y a perseguir una relativa prosperidad libre, en general, de rapacidad. La misma reivindicación básica está presente en muchas de las movilizaciones más recientes, tanto de ecologistas como de activistas contra la corrupción, defensores de los derechos civiles o, una vez más, automovilistas.

A la hora de buscar una explicación de este fenómeno, no me he guiado por una teoría normativa de la sociedad civil en la literatura sobre la modernización, sino por dos corpus de trabajo separados pero relacionados. El primero es el de la teoría del movimiento social –más un conjunto de herramientas analíticas que una teoría completa–, la cual define un movimiento social como “una interacción continua entre un conjunto específico de autoridades y varios portavoces por un desafío planteado a dichas autoridades” (Tilly, 1984), en la que “las acciones afectan a otras acciones: las acciones no son meramente respuestas independientes aisladas a unas circunstancias económicas o sociales externas, sino que una acción cambia más bien la probabilidad de las acciones subsiguientes” (Oliver y Myers, 2003). Así, más que analizar organizaciones como las ONG –como es habitual en la literatura tradicional sobre la sociedad civil–, me centraré en los movimientos sociales como interacciones entre los ciudadanos y sus estados –que, a fin de cuentas, es como ha sido definida la sociedad civil desde los tiempos de la Ilustración–, así como, por consiguiente, en las formas en que esta interacción se estructura (o no se estructura) y evoluciona en el tiempo (o no lo hace). El segundo corpus de literatura lo resume sucintamente Joel Migdal, quien sostiene que los estados y las sociedades evolucionan conjuntamente y pone el énfasis en la noción de “proceso –en las luchas en curso entre coaliciones variables sobre las reglas que determinan la conducta diaria. Estos procesos determinan cómo las sociedades y los estados crean y mantienen formas distintivas de estructurar la vida cotidiana (la naturaleza de las normas que regulan el comportamiento de las personas, a quién benefician y a quién perjudican, qué clase de elementos unen a las personas y cuáles las dividen, qué significados comparten las personas acerca de sus relaciones con los demás y acerca de su lugar en el mundo). Y estos procesos también determinan la forma en que son desafiadas y cambian las reglas y las pautas de subordinación y de dominación” (Migdal, 2001).

Esto, por lo tanto, nos proporciona la base teórica (a su vez basada en una observación previa) de la expectativa de que la sociedad civil rusa se debería efectivamente desarrollar conjuntamente con su Estado (aunque se trate de un Estado autoritario). Si la sociedad civil es un medio de apelación colectivo al Estado por parte de los ciudadanos, esta tiene que reflejar necesariamente al Estado, que es en sí mismo un reflejo de los medios y de los fines del poder tal como son percibidos por la élite. Pero, como sugieren Tilly (1984), Migdal (2001) y otros, una vez institucionalizadas y arraigadas en pautas de interacción social, las estructuras de la sociedad civil tienen el potencial de

volverse vinculantes para el propio Estado, aunque la teoría sea neutral respecto a si este vínculo es de carácter democrático o autoritario. Sin embargo, para entender dónde nos encontramos respecto al desarrollo de la sociedad civil rusa, y para poder de este modo responder a estas cuestiones, será útil revisar primero el camino a través del cual hemos llegado a la situación actual, y esta historia comienza en la Unión Soviética.

DE DÓNDE VENIMOS: LA EXPERIENCIA SOVIÉTICA

En junio de 1977, en vísperas de la adopción de una nueva constitución, 57 disidentes soviéticos firmaron una carta abierta con la intención frustrada de que fuera publicada en el periódico *Pravda*, en la que pedían una amnistía general de presos políticos¹. Este tipo de cartas y peticiones, aunque siguieron teniendo su importancia dentro del movimiento disidente, se vieron eclipsadas en el transcurso de la década de 1970 por los intentos de instigar una presión internacional sobre el Gobierno soviético. Esta tendencia se vio reforzada en gran parte por la firma por parte de la Unión Soviética del Acta Final de Helsinki, con sus aspectos sobre derechos humanos, que dio al movimiento (a través de los grupos de observación de Helsinki) una palanca para ejercer presión desde el exterior. De este modo, la principal preocupación del régimen fue, cada vez más, no tanto la disidencia de los activistas concentrada en el movimiento de los derechos humanos, sino su habilidad para canalizar información a Occidente por medio de periodistas y diplomáticos extranjeros.

Y así, en enero de 1980, el Politburó condenó al exilio en Gorki a los destacados activistas a favor de los derechos humanos Andrei Sájarov y su esposa, Elena Bonner, con el objetivo explícito de dificultar su comunicación con los occidentales². En todo el espectro de la disidencia organizada, aquellos que no tuvieron la suerte de recibir un Premio Nobel de la Paz fueron encarcelados, incluidos personajes tan destacados como la activista de Helsinki Tatiana Osipova, los dirigentes judíos Natan Shcharanski y Iuri Orlov, como también Leonard Ternovski, un destacado activista de la Comisión de

1. Todas las referencias a pie de página de los documentos consultados están sacadas del *Archivo Andrei Sájarov* de Moscú y utilizan la notación del propio Archivo. Las citas han sido traducidas por el autor al inglés [y estas, a su vez, han sido traducidas al castellano por el traductor de este artículo]. PA 95: f.3, op.80, d.642, 1. 22-23.

2. PA 99: f.3, op.80, d.642, 1. 59-67 (TsK KPSS, 3 ene 1980, Protocolo nº 177).

Trabajo en psiquiatría. Si bien el KGB de finales de los años setenta aún fue capaz de adoptar un punto de vista un tanto filosófico sobre el reto que representaba la disidencia, a comienzos de la década de 1980 este dio pocas muestras de tolerancia. Durante el período que va de 1981 a 1984, el KGB informó que, pese a su exilio interior, Sájarov y Bonner continuaban representando uno de los ejes fundamentales de la oposición; por ello, solicitaron y obtuvieron permiso para restringir todavía más sus movimientos y la posibilidad de comunicarse con el exterior³. El KGB también recurrió a métodos menos formales de presión, incluidos el envío de amenazas de muerte contra Sájarov y Bonner, así como las visitas nocturnas de “trabajadores” borrachos armados que manifestaban su indignación por la “traición” de los disidentes⁴.

Los riesgos y las crecientes dificultades a los que tuvieron que hacer frente los disidentes, en cierto modo, se vieron equilibrados por la influencia igualmente creciente que su difícil situación les otorgaba en el ámbito internacional. El exilio de Sájarov y Bonner provocó una avalancha de cartas de protesta de dirigentes extranjeros que, para consternación del Kremlin, motivaron discusiones diplomáticas cuyo resultado, a su vez, dio lugar a un interés cada vez mayor por la suerte de otros disidentes y por los movimientos a los que estos representaban⁵. Asimismo, el aumento del número de disidentes condenados al exilio o encarcelados se combinó con la intransigencia creciente del régimen frente al respaldo cada vez mayor que recibían en las capitales occidentales las medidas encaminadas a hacer cumplir los derechos humanos, como la enmienda norteamericana Jackson-Vannink⁶. De todos modos, en la medida en que el régimen mantuvo su intransigencia, tanto interna como internacional, el movimiento se vio impotente para alterar el statu quo. Ni los llamamientos internos ni la presión internacional pudieron lograr la puesta en libertad de los disidentes, y mucho menos la promulgación de reformas. En esencia, cada día que un disidente permanecía en libertad era una victoria, y poco más se podía esperar. En ese contexto, los disidentes encontraron cierto consuelo moral en su activismo, y sostuvieron que su victoria no residía tanto en la consecución de objetivos como en la mera negativa a quedarse callados. Así, en una carta abierta en protesta por la detención de Tatiana Osipova, un grupo de disidentes escribió:

3. Véase, por ejemplo: PA 106: f.3, op.108, d. B.6.9.4.1/1, l. 7-9 (KGB, 21 jun 1981, n° 1673-A); PA 120: f.3, op.108, d. B.6.9.4.1/1, l. 115-117 (KGB, 8 dic. 1982, n° 2367-F); PA 127: f.3, op. 108, d. B.6.9.4.1/1, l. 162-168 (Tsk KPSS, 28 abr 1984, protocolo n° 156).

4. ARS 00385: f. 1, op. 3, ed. khr. 38, doc. 4.

5. Véase, por ejemplo: PA 109: f. 3, op. 108, d. B.6.9.4.1/1, l. 28-29; PA 110: f. 3, op. 108, d. B.6.9.4.1/1, l. 30-31; PA 115: f. 3, op. 108, d. B.6.9.4.1/1, l. 81-82.

6. La enmienda Jackson-Vanik fue adoptada por el Congreso de Estados Unidos en 1974 para animar a la Unión Soviética a permitir la emigración judía a Israel o cualquier otro lugar, e imponía sanciones comerciales a los regímenes que impidieran el libre movimiento de ciudadanos a través de las fronteras.

“Todas sus ‘actividades’ emanan de unas cualidades humanas naturales: rectitud, amabilidad, misericordia, compasión. Y de la fuerza singular de su postura moral, cuya esencia es extraordinariamente simple: cada persona tiene la responsabilidad de todo aquello que pasa a su alrededor. Sabiendo que alguien está necesitado, es imposible no intentar ayudarlo. Tania ‘simplemente’ hace lo que no puede hacer. Esta es la voluntad de su deuda moral”⁷.

Menos de un año después de la detención de Osipova, Leonard Ternovski captó el espíritu del movimiento en pro de los derechos humanos en las palabras finales de su alocución ante el tribunal que le juzgaba, y lo hizo de una forma tan reveladora que las cito aquí prácticamente en su totalidad:

“Cuando este juicio termine, será demasiado tarde para explicar por qué elegí seguir este camino que me ha llevado al banquillo de los acusados. Me gustaría que la gente me entendiera. Y el tribunal no debería mostrarse indiferente a los motivos del acusado.

¿Qué me ha llevado a las filas de aquellos a quienes unos llaman defensores de los derechos y otros califican de parias?

Empecé a convencerme de la fatalidad del silencio frente a la injusticia en gran parte bajo la influencia de los documentos del 20 Congreso del PCUS. Mil novecientos cincuenta y seis fue el año de mi despertar cívico. Comprendí que, por pequeño que sea yo en el contexto de mi país, sigo siendo responsable de todo lo que en él suceda. Pero esto era todavía solo una forma de pensar. Como rechazaba por principio cualquier camino que implicase violencia, no encontraba oportunidades para expresar de forma significativa mi protesta.

A finales de los años sesenta, conocí a unas personas que empezaban a hablar abiertamente contra aquello que consideraban injusto. El hecho de que eligieran como arma de combate la palabra y solamente la palabra, así como el coraje que manifestaban al hablar, suscitó mi simpatía y respeto por ellos. Vi que era posible oponerse a la injusticia con valentía y hablando abiertamente.

Hoy soy acusado a causa de mi trabajo público, que yo califico de defensa de los derechos y que la acusación prefiere calificar de propagación de ideas calumniosas. Participé en los trabajos de la Comisión sobre psiquiatría, firmé numerosos documentos y peticiones. Ya he dicho que estoy convencido de su verdad. Pero ¿por qué

7. ARS 01338: f. 1, op. 3, ed. khr. 37, doc. 3.

lo hice? ¿Esperaba, al hacerlo, poder corregir aquello contra lo que estaba luchando, ayudar a aquellos en cuyo nombre estaba hablando? Por supuesto, quería que mis palabras fueran escuchadas, y me sentía feliz cuando podía mejorar la suerte de alguien. Pero todo en la vida es más complicado. La experiencia de muchos años demuestra que a menudo nuestras protestas son incapaces de eliminar algún mal en particular. Sin embargo, no considero que estos llamamientos y protestas hayan sido en vano. Incluso aunque no aporte ningún beneficio visible, creo que una protesta contra la injusticia contribuye a hacer una sociedad más sana. Tiene que haber personas en el país que estén dispuestas a luchar por la justicia. Y si es preciso, a ir a la cárcel por ello.

Como médico, sentía una responsabilidad particular por lo que se estaba haciendo en nombre de la medicina. Me di cuenta de que se estaba produciendo un uso indebido de la psiquiatría, y que dichos abusos han de ser combatidos. Así, después de la detención de Aleksandr Podrabinek, cuando el único miembro de la Comisión que permanecía en libertad era Viacheslav Bakhmin, decidí entrar en la Comisión.

Preferiría que mis acciones y llamamientos no hubieran sido necesarios. Se supone que los derechos y la ley han de defenderlos primero y, sobre todo, los fiscales y los demás órganos de la jurisprudencia. Si lo hicieran de forma regular y diligente, no sería necesario que hubiera defensores de los derechos.

Estaba seguro de que sería arrestado y juzgado como lo estoy siendo ahora. Naturalmente, eso no significa que mi objetivo fuera ir a parar a la cárcel. Tengo casi 50 años, no 15, y no tengo ninguna necesidad de esa clase de romanticismos. Preferiría no tener que pasar unos años en la cárcel. Pero renunciar a mi compromiso con lo que considero que es mi deber me parece deshonesto.

Ahora escucharé el veredicto de este tribunal. Al fin y al cabo, mi sentencia también será un reconocimiento involuntario de la importancia de aquello que he dicho y hecho. Y mi futura rehabilitación es tan inevitable como la condena actual.

De acuerdo con mis convicciones, he tratado de combatir la injusticia, ayudar a la gente, hacer el bien. Esto explica mis acciones y mis palabras.

Y soy muy consciente de que voy al cautiverio por ellas”⁸.

Fue este espíritu el que alimentó al movimiento durante estos años de penalidades. El régimen y el movimiento se habían enfrentado, y a efectos prácticos habían llegado a un callejón sin salida; el movimiento no tenía fuerza para hacer cambiar al régimen, y este era

8. ARS 00377: f. 1, op. 3, ed. khr. 37, doc. 6.

totalmente incapaz de derrotar a un movimiento para el cual cualquier posible salida representaba una victoria. Esta situación solo empezó a cambiar cuando el régimen comenzó a hacer sus propias reformas. En diciembre de 1986, el Politburó de Mijaíl Gorbachov, formado bajo las banderas de la glásnost y la perestroika, discutió si sacaban a Sájarov del exilio:

Gorbachov: Sí, hemos enviar al camarada Marchuk para que hable con él y le explique que los académicos han hablado con las autoridades soviéticas y que éstas les han ordenado que hablen con él para que regrese a una vida normal. Para que le diga que hay que cerrar el pasado. El país ha puesto en marcha un gigantesco proyecto creativo. Que le pregunte si está dispuesto a dedicar sus conocimientos y su energía al servicio del país y de los ciudadanos.

Gromiko: En principio esto está bien.

...

Cherbikov: Pero en una de sus cartas decía [...] que no podía estar callado si el silencio era anatema.

Gorbachov: Que hable. Y si habla contra el pueblo, que asuma él mismo las consecuencias. Así pues, camaradas, ¿tiene alguien alguna otra pregunta al respecto?

Miembros del Politburó: Esto será una recompensa para nosotros⁹.

Según Grigori Marchuk, el académico enviado por el Politburó a negociar con Sájarov, este se quedó atónito ante la iniciativa de Gorbachov¹⁰. Era evidente que Sájarov había comprendido muy pronto las diferencias entre Gorbachov y sus predecesores, y había mandado una carta al nuevo líder pidiéndole participar en el proceso anunciado por la glásnost y la perestroika; no había enviado nada parecido ni a Yuri Andropov ni a Konstantín Chernenko. Sin embargo, según Marchuk, Sájarov no esperaba una respuesta positiva del régimen y, en consecuencia, se quedó muy asombrado por la aparente magnitud del cambio que representaba la invitación de Gorbachov. Tras regresar a Moscú y restablecer la red de contactos, Sájarov y sus colaboradores más cercanos regresaron rápidamente a la acción, y dedicaron gran parte de los años 1987 y 1988 a elaborar listas y a pedir la liberación de los presos políticos restantes¹¹.

9. PA 168: f. 3, op. 120, d. 72, l. 533-535 (TsK KPSS, 1 dic. 1986).

10. PA 154: f. 3, op. 108, d. B.6.9.4.1/2, l. 182-187.

11. Véase, por ejemplo: ARS 00488: f. 1, op. 3, ed. khr. 47, doc. 11; ARS 00474: f. 1, op. 3, ed. khr. 47, doc. 12; ARS 00489: f. 1, op. 3, ed. khr. 47, doc. 15.

A medida que progresaba la perestroika, sin embargo, el movimiento demostró estar mal preparado para la rehabilitación. Las discrepancias que se habían visto eclipsadas por la figura monolítica del régimen pasaron a primer plano en cuanto las discusiones se centraron en las estrategias para adaptarse a lo que prometía ser una nueva Unión Soviética. El año 1988, en particular, vio la creación de dos nuevas organizaciones muy influyentes. La primera, la Tribuna de Moscú, se creó siguiendo el mismo patrón que el Comité y las organizaciones de disidentes más antiguas, y llegó a reunir a unos 130 intelectuales con el propósito de organizar debates y discusiones¹². En aquel entorno en el que cabía la posibilidad de que el compromiso con el régimen pudiese producir cambios, el impulso pasó a un grupo nuevo y más dinámico de organizaciones, inicialmente conducido por Memorial, que se creó unos días más tarde. Unas 600 personas procedentes de 58 ciudades soviéticas asistieron al congreso fundacional de Memorial celebrado en Moscú, entre las cuales se encontraban prácticamente todos los disidentes más destacados. Pero lo que había empezado siendo una iniciativa prometedora cayó al nivel de una pelea a puñetazos¹³. Incapaces de ponerse de acuerdo en una visión progresista enfocada hacia el futuro, los activistas de Memorial apenas se pudieron poner de acuerdo sobre cómo presentar los crímenes del pasado (Sájarov, 1990). Los movimientos a favor de los derechos humanos que se encontraban fuera de Rusia, como el Grupo Ucraniano de Helsinki, se convirtieron en partidos políticos y empezaron a presionar para conseguir la independencia (Lukyanenko, 1991). Paralelamente, en diciembre de 1989, los restos del Comité fueron transformados en un Centro de Información Internacional por los Derechos Humanos¹⁴. Dicho de otro modo, cuando el régimen empezó a invitar al movimiento a la mesa de negociaciones, el movimiento acudió a ella con poca cosa que decir.

Este hecho ha sido interpretado por muchos de los analistas antes mencionados como un fracaso de la sociedad civil soviética y postsoviética; en particular, le hacen dos acusaciones aparentemente injustas. La primera consiste en acusar a los líderes de la disidencia de abandonar el ámbito supuestamente apolítico de la sociedad civil para entrar en el de la sociedad política. Esto, sin embargo, atribuye unas expectativas normativas a unos individuos y a unas iniciativas que nunca las buscaron de este modo. Recuérdese que inicialmente el movimiento por los derechos humanos en la Unión Soviética no pretendía ser ni apolítico ni de oposición. Cuando se adoptaba una actitud moral apolítica –y esto fue en gran parte lo que se hizo tanto en Checoslovaquia,

12. FSK-2, doc. 67 (KGB, 15 oct. 1988, No. 1791-K).

13. FSK-2, doc. 68 (KGB, 16 nov. 1988, No. 1979-K).

14. ARS 00313: f. 1, op. 3, ed. khr. 48, doc. 10.

Hungría o Polonia, como en la URSS—, se hacía concretamente porque el régimen no dejaba margen para el compromiso participativo. Censurarlos por abandonar esta actitud cuando tuvieron a su disposición enfoques más directos es una forma de confundir los fines y los medios.

La segunda acusación sostiene que los líderes de la sociedad civil no supieron comprender el entorno cambiante en el que operaban y que, o bien permanecieron deudores de los viejos modelos de oposición, o bien se concentraron, como hizo Memorial, en la reevaluación del pasado más que en desarrollar una agenda para el futuro. Este argumento es considerablemente más complicado que el primero y merece mayor atención. Es indudable que muchos de los líderes de la sociedad civil en todo el espacio postcomunista demostraron ser bastante torpes a la hora de gestionar las nuevas realidades. Algunos de los líderes que pasaron a la política —incluidos Sájarov, Vaclav Havel y Lech Walesa— a menudo se mostraron incompetentes y fueron frecuentemente impopulares. Organizaciones como el Grupo Moscovita de Helsinki, por ejemplo, aunque siguen actuando en la Rusia postsoviética, han perdido influencia entre una opinión pública que las considera cada vez más irrelevantes y estridentes. Lo mismo se puede decir de respetados periódicos y revistas de la disidencia. Cuando la crisis de estas iniciativas se ha hecho interminable, estas han tratado de identificar nuevos temas y estrategias para recuperar el terreno perdido; pero en su mayor parte han fracasado.

Es inapropiado, sin embargo, interpretar esto como una crisis de la sociedad civil. Dichas crisis lo son más bien de ciertos líderes, organizaciones y/o iniciativas, y sus fracasos son específicos. Determinados individuos han tenido problemas para cambiar de hábitos y de actitudes. Otros, pese a hacer valerosos esfuerzos, han sido incapaces de ganarse la atención de un electorado público suficiente. Pero, una vez más, los fracasos relativos de Memorial y del Grupo Moscovita de Helsinki para mantener su importancia previa sugieren simplemente que los temas que ellos representan son ahora menos relevantes para la opinión pública de lo que lo fueron en el pasado. Calificar esto de fracaso de la sociedad civil es afirmar que Memorial y el Grupo Moscovita de Helsinki representan determinados valores eternos e inmutables que siempre tienen que estar bien representados por la sociedad civil. Este enfoque no deja margen para unas demandas públicas cambiantes.

El punto más importante que conviene destacar, en este sentido, es el que sugiere la teoría: los movimientos de defensa de los derechos humanos, pese a haber sido intelectualmente potentes, moralmente impecables y sumamente legítimos, murieron porque el Estado con el que habían evolucionado para interactuar dejó de existir. ¿Cómo es posible que algo como el *samizdat* [la copia y distribución de literatura clandestina prohibida] siguiera existiendo una vez suprimida la censura? ¿Cuál podía ser su propósito? ¿A quién podía ser útil? ¿De dónde sacaba su significado como acto de desafío y autonomía moral?

LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CONTRATO SOCIAL POSTSOVIÉTICO

¿Qué significa hoy en día ser un ciudadano de Rusia? Esta es una cuestión diferente de lo que significa ser ruso, con todo el bagaje de atributos étnicos, lingüísticos, religiosos, culturales e históricos que ello implica. Ser un ciudadano de la Federación Rusa lleva consigo un conjunto de derechos y responsabilidades formales consagrados en la Constitución y en otras leyes, incluidas las relativas al voto, el servicio militar, los servicios sociales, etc. La ciudadanía también lleva consigo una adscripción heredada al territorio, un conjunto de símbolos, unos equipos deportivos nacionales y otras cosas por el estilo. Todas estas cosas tienen ciertamente un significado, pero solo en el contexto más básico y profundo de la naturaleza básica de la relación entre el ciudadano ruso y el Estado ruso. Y si bien durante los últimos veinte años la manera en que el Estado ruso se ha comportado durante la transición ha dado forma a este significado, ahora se puede argumentar que el significado del concepto de ciudadanía rusa se ha consolidado lo suficiente como para dar forma a su vez en muchos sentidos al futuro desarrollo del propio Estado.

El significado profundo del concepto de ciudadanía se discute a menudo en los términos de un contrato social, y en Rusia este contrato se concibe con frecuencia como si implicase una cierta quiescencia política a cambio de prosperidad —un trato del que generalmente se dice que ha estado garantizado durante la primera etapa de Putin. El reto consiste en hacer que este argumento encaje con lo que sabemos de la economía política de este período. Expresado brevemente, la búsqueda de privilegios con la consiguiente captación de rentas es el principio guía de la economía política rusa contemporánea, un principio que da forma a la peculiar relación existente entre las instituciones formales e informales de Rusia. Gaddy e Ickes (2009) se encuentran entre los más destacados académicos que han descrito la forma en que una élite rentista ha transformado la caótica competencia de suma cero de la década de 1990, en el sistema de competencia organizada que ha proporcionado a una élite cada vez mayor una fuente de rentas creciente desde el año 2000.

Según Migdal (2001), si Rusia tiene una élite rentista, podemos esperar que se produzca un contrato social congruente con ella. Mitchneck (1995) y otros nos recuerdan la importancia que tenía durante el período soviético la posesión de un lugar de trabajo para la provisión de servicios sociales y, de hecho, para el mantenimiento del estilo de vida del trabajador; afirman que la continua provisión de dichos servicios por medio del lugar de trabajo durante el período inicial de la transición actuó como freno a la migración laboral. Pero el fenómeno de la provisión de bienes y servicios sociales basada en la posesión de un puesto de trabajo se habría visto afectado por el déficit económico de la era soviética, a consecuencia del cual la adquisición efectiva de bienes y servicios sociales a los que uno

tenía nominalmente derecho se llevaba a cabo mediante la movilización de redes e instituciones informales o por el sistema del *blat*¹⁵. Y si bien la transición trajo consigo un final gradual (aunque no total) de la provisión de bienes y servicios en el puesto de trabajo, las instituciones informales han continuado existiendo, de modo que los ciudadanos rusos siguen recurriendo a prácticas informales para asegurarse la provisión adecuada de, como mínimo, vivienda, cuidados sanitarios y educación. Además de seguir anclando a muchos rusos en ciudades industriales agonizantes como Pikalevo o Zabaikalsk, estas prácticas son en sí mismas una forma de extracción de rentas. Y si bien los rusos admiten la naturaleza poco óptima de dichas transacciones, al mismo tiempo oponen una resistencia formidable a reformas racionalizadoras como la introducción de un examen de ingreso unificado en las universidades estatales o las asociaciones de condominios, que habrían requerido el abandono de unas prácticas informales que actualmente ocupan un lugar muy importante en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

En 2003 Stephen K. Wegren escribió sobre la relación cambiante que estaban manteniendo los rusos del mundo rural con su Estado, sosteniendo que:

“La naturaleza del contrato social rural cambió en tres aspectos importantes: 1) el “contrato” se cambió desde abajo, no desde arriba; 2) los hogares rurales se volvieron menos dependientes del Estado respecto a sus ingresos y bienestar; y 3) el contenido del “contrato” cambió desde el intercambio propio de la era soviética de unos estándares de vida cada vez mejores por una quiescencia/conformidad, a una mayor libertad económica a cambio de una quiescencia/conformidad política” (Wegren, 2003).

En este sentido, sostengo que este cambio en el contrato social –realmente más parecido a un acuerdo de divorcio que a un contrato prenupcial– concierne no sólo a las comunidades rurales sino al país en su conjunto, y que el aspecto más sobresaliente del mismo es efectivamente el intercambio de la quiescencia por la autonomía económica y no por la prosperidad. Y si bien esta autonomía parecería estar condenada, dada la incapacidad y la falta de voluntad del Estado para cumplir con su parte del trato económico y social establecido en la era soviética, el argumento adquiere un matiz más sofisticado visto en el contexto de la atomización de la relación Estado-sociedad que caracteriza a la gober-

15. N. del Trad.: *Blat* es un término que ya se utilizaba en el antiguo Imperio ruso y que en la época de la Unión Soviética se refería al uso de acuerdos informales, conexiones personales, intercambios de servicios o contactos dentro de la estructura burocrática del PCUS para conseguir en el mercado negro algunos productos racionados o no disponibles al público en general, o simplemente para salir del paso.

nanza postsoviética. Así, aunque el Estado ya no estaba en condiciones de proporcionar una prosperidad relativa como un bien público, sí que aún es capaz de proporcionar y/o de dificultar la prosperidad relativa como un bien individual (o en ocasiones, asociativo). De este modo, los individuos que actúan por interés personal se pueden abstener de todo compromiso político a fin de asegurarse la propia quiescencia o no interferencia del Estado en su prosperidad personal.

De esta manera, si el contrato social es un contrato de no interferencia, la lealtad resulta ser extraordinariamente escasa ante un incumplimiento por parte del Estado. Y las pruebas de esta afirmación no son nuevas. Posiblemente, el mejor ejemplo de una movilización de este tipo se produjo en mayo de 2005, cuando Viacheslav Lysakov lideró casi accidentalmente una revuelta nacional de automovilistas, irritados por un plan gubernamental consistente en prohibir los coches con el volante a la derecha, lo que habría vetado la circulación de dos millones de automóviles de un día para otro. En cuatro días, Lysakov y sus seguidores consiguieron que más de 6.000 coches salieran a la calle para protestar y bloquearan el tráfico en muchas ciudades, desde Moscú hasta Vladivostok. Estas movilizaciones continuaron hasta bien entrado el año 2007, en protesta por cualquier regulación gubernamental que considerasen injusta, y a menudo obligaron al Gobierno a retractarse (Greene, 2010). A comienzos de 2006 se produjo un punto de inflexión importante cuando este movimiento, que llegó a ser conocido como *Svoboda Vybora* (Libertad de elección), organizó una movilización a favor de Oleg Shcherbinski, un conductor acusado de provocar la muerte del gobernador de la región de Altai, Mijáil Evdokimov, que murió cuando el primero no consiguió esquivar el coche de este último que viajaba en sentido contrario. La movilización no sólo logró recaudar el dinero suficiente para pagar la defensa de Shcherbinski, sino que generó tal publicidad en torno al caso que Shcherbinski fue finalmente puesto en libertad sin cargos. Lo más importante, sin embargo, fue que con la adopción del lema “Todos somos Shcherbinski”, el movimiento pivotó desde una actitud reactiva a una formulación proactiva del asunto y expresó un grado de solidaridad hasta entonces desconocido en las protestas rusas.

A finales del 2007, sin embargo, la opinión general era que Viacheslav Lysakov había sido asimilado por el Estado, ya que este le había ofrecido cargos en diversas comisiones políticas normativas y alentado a mantener a *Svoboda Vybora* fuera de las calles. Los movimientos sociales, no obstante, trascienden a las organizaciones; por ello, el movimiento como tal continuó existiendo y mantuvo la actitud y el mensaje solidarios que habían surgido a consecuencia del caso Shcherbinski. Grupos como la Federación de Automovilistas de Rusia (cuyas siglas en ruso, FAR, significan también “faro”) y las Brigadas del Cubo Azul (*Simie vederki*) han mantenido la presión sobre el Gobierno para que ponga freno al empleo abusivo de luces de emergencia (*migalki*), que aparentemente permiten a miles de funcionarios gubernamentales desobedecer las normas del tráfico y poner en peligro la vida de los ciudadanos comunes.

De modo parecido, los movimientos de protesta llamados NIMBY (*Not-In-My-Back-Yard*, “no en mi patio trasero”) han sabido pasar de las reivindicaciones particulares acerca de la calidad de vida local a reivindicaciones de carácter más general sobre la justicia, el cumplimiento de la ley y los derechos de los ciudadanos. Así, Evgenia Chirikova, líder del movimiento contra la construcción de una autopista para la protección del centenario bosque de Jimki, en las afueras de Moscú, declaró lo siguiente a la revista *The New Times*:

“¿Sabe? Mi forma de pensar es absolutamente local: dicho de otro modo, yo no pienso de forma grandilocuente, como hacen algunas personas, sino en función de lo que se ve desde la ventana de mi casa. Para mí es muy importante poder salir con mis hijos de nuestra casa y encontrarme en un lugar medioambientalmente sano. Y que nadie me lo pueda quitar. Mi entorno inmediato es muy importante para mí. Y cuando vi que pretendían arrebátarmelo, mi conciencia se despertó y comprendí que sin un país normal no tenía ni siquiera la garantía de que podría conservar este entorno inmediato, y que podrían arrebatar me cualquier cosa: mi trabajo, mis hijos, y no solo el entorno en el que vivo. Dicho de otro modo, para mí un país normal es aquel en el que se respetan mis derechos” (Al’bats, 2011).

CONCLUSIONES

Ciertamente, la retórica de los nuevos movimientos de protesta como el de Chirikova que han surgido desde el 2005 y que han adquirido una importancia cada vez mayor en los últimos años es convincente, sobre todo porque es a la vez auténtica y tocquevilleana (también es destacable la similitud entre la retórica de Chirikova y la de Leonard Ternovski que hemos citado con anterioridad). Al fin y al cabo, la mayoría de los obituarios anteriores escritos para la sociedad civil rusa habían identificado el escaso capital social y el legado antiliberal leninista como las causas principales del fallecimiento de la misma. El hecho de que los activistas de los movimientos populares de base –sin una educación previa en política ni financiación alguna por parte del National Endowment for Democracy¹⁶– hayan redescubierto independientemente el vocabulario

16. N. del Ed...: El National Endowment for Democracy (NED: <http://www.ned.org>) es una fundación privada sin ánimo de lucro, que cuenta con financiación del Congreso de Estados Unidos, dedicada a potenciar y fortalecer instituciones democráticas alrededor del mundo mediante la financiación de proyectos de grupos no gubernamentales.

utilizado en su día por Locke y Hume es efectivamente notable, y echa por tierra muchas de nuestras falsas ideas previas.

Pero su aparición difícilmente es el fin de la historia. Para lograr sus objetivos, los nuevos activistas no tienen que derrocar al régimen. Su tarea implícita es, más bien, la de proporcionar y probar el valor de una alternativa, una visión de las relaciones Estado-sociedad en la que, por lo menos en casos raros y excepcionales, los funcionarios estén sometidos a la ley y los ciudadanos protegidos en sus derechos por ella. La cuestión crucial a la que tiene que hacer frente Rusia hoy en día es saber si la sociedad civil, tal como es ahora, podrá definir y afirmar un nuevo significado al concepto de ciudadanía rusa en el que la soberanía pública y la responsabilidad colectiva desempeñen un papel prominente, así como que se restablezca un espacio público; o, por el contrario, si la inercia centrífuga de la desafección prevalecerá y la ciudadanía se seguirá percibiendo más como un accidente y una carga que como un derecho y una oportunidad.

Referencias bibliográficas

- AL'BATS, E. "Edinstvennoe, chego u menia net - normal'noi blagopoluchnoi strany". *The New Times* (3 de octubre de 2011).
- EVANS Jr., A. B.; HENRY, L. A.; SUNDSTROM, L. M. (eds.) *Russian Civil Society: A Critical Assessment*. ARMONK, NY: M.E. Sharpe, 2006.
- FISH, M. Stephen. *Democracy from Scratch. Opposition and Regime in the New Russian Revolution*. Princeton: Princeton University Press, 1995.
- *Democracy Derailed in Russia. The Failure of Open Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- GADDY, C. G.; ICKES, B. W. "Russia's Declining Oil Production: Managing Price Risk and Rent Addiction". *Eurasian Geography and Economics*, vol. 50, n.º 1 (2009), p. 1-13.
- GREENE, Samuel A. "Gosudarstvo i obshchestvennyi suverenitet". *Pro et Contra*, vol. 10, n.º 1 (2006), p. 25-39.
- "Making democracy matter: Addressing state-society engagement in post-communist transition". Annual Meeting of the American Political Science Association, 2007.
- GREENE, Samuel A.; Robertson, Graeme B. "Politics, justice and the new Russian strike". *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 43, n.º 1 (marzo de 2010), p. 73-95.
- HOWARD, Marc Morje. *The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- JAVELINE, Debra; Lindemann-Komarova, Sarah. "A Balanced Assessment of Russian Civil Society". *Journal of International Affairs*, vol. 63, n.º 2 (primavera/verano 2010), p. 171-188.
- LUKYANENKO, L. "From the Spirit of Helsinki to Independence". *Uncaptive Minds*, vol. 4, n.º 3 (1991), p. 53-54.

- MIGDAL, Joel. *State in Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- MITCHNECK, B.; PLANE, D. A. "Migration and the Quasi-labor Market in Russia". *International Regional Science Review*, vol. 18 (1995), p. 267.
- OLIVER, P. E.; MYERS, D. J. "The Coevolution of Social Movements". *Mobilization*, vol. 8, n.º 1 (2003), p. 1-25.
- OTTAWAY, Marina; CAROTHERS, Thomas. *Funding Virtue. Civil Society Aid and Democracy Promotion*, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2000.
- ROSE, Richard. "Modern, pre-modern and anti-modern social capital in Russia". *Studies in Public Policy*. Glasgow: Centre for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, 1999.
- SÁJAROV [Sakharov], Andrei. *Moscow and Beyond. 1986 to 1989*. London: Hutchinson, 1990.
- TILLY, Charles. "Social Movements and National Politics", in: Bright, C.; Harding, S. (eds.). *Statemaking and Social Movements. Essays in History and Theory*. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1984.
- WEGREN, Stephen K. "The rise, fall, and transformation of the rural social contract in Russia". *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 36, n.º 1 (2003), p. 1-27.